

**PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COMUNIDADES NO ÉTNICAS EN EL TRÁMITE DE
LICENCIAMIENTO AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA**



CARLOS DAVID RAMIREZ BENAVIDES

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de:
Especialista en Planeación Ambiental y Manejo Integral de los Recursos Naturales

Director:

Ximena Pedraza

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

FACULTAD DE INGENIERIA

PROGRAMA PLANEACIÓN AMBIENTAL Y MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES

BOGOTÁ, 10 DE DICIEMBRE DE 2018

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COMUNIDADES NO ÉTNICAS EN EL TRÁMITE DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

CITIZEN PARTICIPATION OF NON-ETHNIC COMMUNITIES IN THE PROCESS OF ENVIRONMENTAL LICENSING IN INFRASTRUCTURE PROJECTS

Carlos David Ramírez Benavides
Abogado
Facultad de Ingeniería
Universidad Militar Nueva Granada
Bogotá, Colombia
U2700878@unimilitar.edu.co

RESUMEN

En este artículo se presenta una revisión de la bibliografía y entrevistas respecto al estado actual de los dos mecanismos de participación dentro del trámite de licenciamiento ambiental en proyectos de infraestructura con comunidades no étnicas, esto es, audiencias públicas ambientales y terceros intervinientes desde el año 2011 hasta octubre de 2018. Se hace una descripción del principio de democracia participativa conforme a los lineamientos de la Corte Constitucional; posteriormente, se explica cada mecanismo de participación: requisitos y características. Finalmente, se realiza la conclusión con base en la recolección de la información.

Palabras clave: Licenciamiento ambiental; comunidades no étnicas; audiencias públicas; terceros intervinientes; sector de infraestructura.

ABSTRACT

This article presents a review of the bibliography and interviews regarding the current state of the two mechanisms of participation in the process of environmental licensing in infrastructure projects with non-ethnic communities, that

is, public environmental audiences and intervening third parties since 2011 until October 2018. A description of the principle of participatory democracy is made according to the guidelines of the Constitutional Court; Subsequently, each participation mechanism is explained: requirements and characteristics. Finally, the conclusion is made based on the collection of information.

Keywords: Environmental licensing; non-ethnic communities; public hearings; intervening third parties; infrastructure sector.

INTRODUCCIÓN

Con la Constitución Política de 1991, se cambió de una democracia representativa a una democracia participativa [1], en ese sentido, el derecho a la participación tiene mayor valor y esto implica que el ciudadano pueda participar de forma permanente en los procesos que tengan un impacto significativamente en su entorno. El Derecho a la participación ciudadana es un derecho fundamental en una democracia participativa, es uno de los principios rectores de la Constitución Política de 1991 [2], y para que se pueda materializar, el Estado colombiano tiene una serie de deberes y obligaciones, dentro de las que se destaca [3]: “el deber de incentivar la participación democrática y no obstaculizar su ejercicio”.

El derecho a la participación ciudadana es uno de los pilares de la Constitución Política de 1991 [4]; por esto, quedó plasmado en los primeros artículos de la Carta Magna. Así las cosas, en el artículo 1º se establece que [5]: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, [...], democrática, participativa y pluralista, [...]”. Y el artículo 2º, que es un fin esencial del Estado [5]: “[...] facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan [...]”.

También, el artículo 40 de la norma superior, establece que [5]: “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control de poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: [...], 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.” Por lo anterior, la participación ciudadana es un derecho fundamental, y de acuerdo con el artículo 85 *ibídem*, es de aplicación inmediata, es decir el estado debe procurar por la materialización del mismo y suministrar toda la información posible para su real cumplimiento [6].

En ese sentido ha dicho la Corte Constitucional que:

El principio de participación democrática expresa no solo un sistema de toma de decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en

los principios del pluralismo, la tolerancia. El concepto de democracia participativa no comprende simplemente la consagración de mecanismos para que los ciudadanos tomen decisiones en referendos, consultas populares, revocación del mandato de quienes han sido elegidos, sino que implica adicionalmente que el ciudadano puede participar permanentemente en los procesos decisorios que incidirán significativamente en el rumbo de su vida. Se busca así fortalecer los canales de representación, democratizarlos y promover un pluralismo más equilibrado y menos desigual. [7].

La Constitución Política de Colombia en el Capítulo Tercero del Título Segundo denominado “De los derechos, las garantías y los deberes”, consagró, entre otros, el derecho a gozar de un ambiente sano, o también llamados derechos de tercera generación, con el fin de regular la preservación del ambiente y de sus recursos naturales, siendo deber del Estado y sus ciudadanos realizar todas las medidas para protegerlo [5].

En la Ley 99 de 1993 se establece que la política ambiental colombiana se regirá por los siguientes principios: [8] “[...] 12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será descentralizado, democrático, y participativo. [...].” Es así que, en materia ambiental también debe ser aplicado el derecho a la participación ciudadana.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente, en el cual se compilaron normas, sobre el trámite para la obtención de licencias ambientales y, también, compiló normas sobre mecanismos de participación en materia ambiental [9].

En Colombia son muchos los proyectos, obras o actividades que requieren de licencia ambiental, como por ejemplo, la construcción de vías carreteras, férreas, puertos, aeropuertos, entre otros, según el artículo 2.2.2.3.2.1. del Decreto 1076 de 2015. Para dicha obtención de la licencia, el solicitante, esto es, la sociedad, entidad, consorcio o unión temporal, deberá socializar el proyecto, obra o actividad con las comunidades del área donde se llevará a cabo el mismo [10]. Igualmente, durante el trámite administrativo de licenciamiento ambiental, las comunidades pueden ejercer su derecho a la participación.

Merece especial atención que en algunos casos las comunidades no étnicas no se sienten partícipes del trámite de licenciamiento ambiental, y en otros, aun cuando el Estado en cabeza de sus instituciones da plena aplicación de este Derecho, las comunidades quedan inconformes. En ese sentido, surge la necesidad de analizar el estado actual del derecho a la participación ciudadana de comunidades no

étnicas en el trámite de licenciamiento ambiental en proyectos de infraestructura en Colombia. Por este motivo, en el presente estudio se describirá qué se entiende por participación ciudadana en un Estado social de derecho como el colombiano, y se enunciarán las etapas, procedimientos y mecanismos de participación en el licenciamiento ambiental según la normatividad actual en Colombia.

1. MÉTODO

El presente estudio mediante el cual se analizó el estado actual del derecho a la participación ciudadana de comunidades no étnicas en el trámite de licenciamiento ambiental en proyectos de infraestructura se llevó a cabo con la revisión de referencias bibliográficas, entre las cuales se destacan sentencias de la Corte Constitucional, normas jurídicas y licencias ambientales y entrevistas a funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Es importante aclarar que la participación ciudadana de comunidades no étnicas en materia ambiental tiene 2 escenarios: el primero, por fuera del trámite de licenciamiento ambiental, y el segundo, dentro del trámite ambiental, este último, es el objeto de estudio del presente artículo.

Así las cosas, se explicó el trámite de licenciamiento ambiental, esto es, definiciones, etapas, procedimientos, entre otros. Igualmente, se explicó y analizó los diferentes mecanismos de participación ciudadana para comunidades no étnicas dentro del trámite de licenciamiento ambiental, esto es, definiciones, requisitos, etapas, procedimientos, entre otros.

1.1 Licenciamiento ambiental

Con los artículos 27 y 28 del Decreto-Ley 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y de sus artículos que regularon la Declaración de Efecto Ambiental (DEA) y el Estudio Ecológico Ambiental (EEA), respectivamente, Colombia consagra la necesidad de declarar el efecto ambiental negativo y la correspondiente evaluación del impacto ambiental derivado de los diferentes proyectos, obras y actividades; sin embargo, a partir de 1993 con la expedición de la ley 99, se empezó a hablar de un sistema de licenciamiento ambiental más estructurado [11].

A partir de la expedición de la ley 99/1993 la licencia ambiental se institucionalizó como el principal instrumento para la evaluación ambiental en Colombia. Es así que, para obtener este instrumento, las normas han establecido de manera específica y concreta que proyectos, obras o actividades deben tener licencia ambiental y cuál es el procedimiento que deben agotar para su obtención [12].

La ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, define Licencia Ambiental como:

La autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia, de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada [8].

El artículo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 1076 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en relación con la licencia ambiental, establece que:

La licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. [9].

La Corte Constitucional ha sostenido que sobre la licencia ambiental que: es el acto administrativo de autorización que otorga a su titular el derecho de realizar una obra o actividad con efectos sobre el ambiente, de conformidad con las condiciones técnicas y jurídicas establecidas previamente por la autoridad competente [13].

Igualmente, ha dicho el alto tribunal que [13]: “La licencia ambiental es esencialmente revocable. Para el efecto no se requiere del consentimiento expreso o escrito de su beneficiario, cuando no se estén cumpliendo las condiciones o exigencias establecidas en el acto de su expedición.”

Es importante resaltar en el presente estudio que se han definido algunos criterios jurisprudenciales en relación con la licencia ambiental, a saber:

[...] la licencia ambiental: (i) es una autorización que otorga el Estado para la ejecución de obras o la realización de proyectos o actividades que puedan ocasionar un deterioro grave al ambiente o a los recursos naturales o introducir una alteración significativa al paisaje [...]; (ii) tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o proyectos; (iv) opera como instrumento coordinador, planificador, preventivo, cautelar y de gestión [...]; (v) es el resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que permite la participación ciudadana, [...]; (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde se evalúan varios aspectos relacionados con los estudios de impacto ambiental [...]; y, finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter especial, el cual puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado [...]. [14].

El procedimiento para obtener una licencia ambiental es visto como proceso para la planeación y administración de proyectos, obras y actividades que asegura que las intervenciones antrópicas y el desarrollo económico estén dentro de los parámetros para promover el desarrollo sostenible [15].

Los pasos para obtener una licencia ambiental en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se resumen de la siguiente manera: el primero, es registrarse en el aplicativo la Ventanilla Integral de Trámites en Línea – VITAL, el cual se encuentra en esa Entidad; el segundo, solicite el pronunciamiento acerca de la necesidad de Diagnóstico Ambiental de Alternativas – DAA; el tercero, es la elaboración del estudio ambiental requerido; el cuarto, solicite la liquidación por el servicio de evaluación del trámite requerido; el quinto, es el diligenciamiento y presentación de formularios ante dicha Entidad; el sexto, asistir a la reunión del resultado de la verificación preliminar de la documentación presentada; el séptimo, si la información salió conforme la Autoridad Ambiental expide el Auto de inicio de trámite de evaluación de la solicitud; el octavo, es el inicio de la Evaluación de la viabilidad ambiental del proyecto; el noveno, asistir a la reunión de solicitud de información adicional, en caso de que así se requiera; el décimo, ajustar el Estudio Ambiental de acuerdo a la solicitud de información adicional y entréguelo nuevamente [16].

Dentro del trámite administrativo de licenciamiento ambiental existen 2 mecanismos de participación ciudadana para comunidades no éticas, esto es, las audiencias públicas y los terceros intervinientes.

1.2 Audiencia pública ambiental

El artículo 72 de la ley 99 de 1993 consagró la audiencia pública ambiental. Este mecanismo tiene como finalidad buscar que la comunidad, las autoridades y el solicitante de la licencia ambiental conozcan diversos aspectos de un proyecto. Lo desarrollado en este mecanismo de participación no implica que sea la decisión en relación con la licencia ambiental, esto es, aprobar o negarla, pero lo que en ella se trate sí debe ser tenido en cuenta por la autoridad ambiental al momento de tomar la decisión. Pues si esto no es tenido en cuenta por la autoridad en la Resolución que decide sobre la solicitud de licencia ambiental, podrá ser este acto administrativo objeto de medios de control judicial por falsa motivación [17].

Este mecanismo de participación ciudadana fue [18]: “establecido como un espacio de encuentro, interlocución y diálogo democrático entre la comunidad y la institucionalidad pública, responsable del manejo del tema medioambiental.”

En las audiencias públicas no se toman decisiones, tampoco es una instancia de debate o discusión. Solo algunos pueden solicitarla a la autoridad ambiental donde se está llevando a cabo el trámite, esto es, organismos gubernamentales, procuraduría, defensoría, autoridades ambientales, alcaldes o gobernadores, igualmente, puede ser solicita por al menos 100 personas o 3 organizaciones sin ánimo de lucro [9].

Este mecanismo puede ser solicitado en dos eventos: I) en el trámite de evaluación de una solicitud de licencia ambiental o de su modificación y II) en la etapa de ejecución de un proyecto, obra o actividad, cuando infrinja de forma manifiesta las condiciones y obligaciones de los actos administrativos derivados de la licencia ambiental [9].

Una vez convocada, el solicitante de la licencia debe entregar los estudios ambientales y demás documentos pertinentes en diferentes organismos gubernamentales del área donde se llevará a cabo el proyecto, obra o actividad para que las personas interesadas los puedan consultar. Una reunión informativa

con la comunidad del área de influencia se realiza diez días antes de la audiencia pública, para exponer la dinámica, requisitos y condiciones de la audiencia [9].

Finalmente, es importante mencionar que cualquier persona puede asistir a la audiencia pública ambiental, pero no todos pueden efectuar intervenciones, solamente los que por derecho propio puedan hacerlo, de lo contrario estas personas deben inscribirse previamente en las secretarías de las autoridades ambientales, alcaldías o personerías para poder intervenir en la audiencia [9].

1.3 Terceros intervinientes

Los terceros intervinientes o mejor dicho del derecho a intervenir [17]: “consiste en que cualquier persona puede hacerse parte en un expediente relacionado con el trámite de una licencia ambiental o un permiso para el uso de los recursos naturales renovables.”

No hay demostrar justificación alguna para intervenir, y se adquieren los derechos que tienen las partes en el proceso, esto es, puede solicitar estudios, controvertir los presentados e incluso interponer los recursos de ley en contra de los actos administrativos objeto del trámite de licenciamiento ambiental [17].

EL derecho a intervenir en las actuaciones administrativas de carácter ambiental [17]: “puede ser más efectivo que los otros, siempre y cuando se tenga conocimiento de la legislación ambiental y de los aspectos científicos”, con la finalidad de poder controvertir o apoyar los estudios ambientales presentados por el solicitante de la licencia ambiental.

El artículo 69 de la ley 99 de 1993 sobre el derecho a intervenir, establece que:

Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. [8].

Dicha norma precisa que el derecho intervención en los trámites ambientales se restringe a los siguientes procedimientos: Actuaciones administrativas iniciadas para la expedición de instrumentos administrativos de manejo ambiental de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Actuaciones

administrativas iniciadas para la modificación de dichos instrumentos. Actuaciones administrativas iniciadas para la cancelación (o revocatoria) de instrumentos administrativos de manejo ambiental de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Actuaciones administrativas iniciadas para la imposición de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales. Y Actuaciones administrativas iniciadas para la revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales [8].

2. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

En Colombia han sido muchos los trámites de licenciamiento ambiental que se han llevado a cabo desde que se empezó a exigir este instrumento de control ambiental para la ejecución de proyectos que generen impactos ambientales [8].

Sin lugar a dudas, las actuaciones administrativas tendientes a otorgar licencias ambientales, impactan en el entorno de las personas que habitan en el área de influencia donde se llevará a cabo la ejecución del proyecto, obra o actividad, en algunos casos hacen uso de este derecho y, en otros, no.

En los últimos años, se han incrementado los casos en los cuales las comunidades del área de influencia del proyecto sobre el cual se está adelantando el trámite de licencia ambiental, quieren ejercer su derecho de participación.

El caso más sonado de los últimos tiempos en temas de ejecución de proyectos de infraestructura, quizá fue el proyecto vial “Conexión Pacífico 1”, localizado en los municipios de Venecia, Titiribí, Amagá y Caldas en el Departamento de Antioquia, en el cual la comunidad ejerció su derecho de participación, mediante la convocatoria de una Audiencia Pública y mediante la intervención de terceros en el trámite de licenciamiento ambiental [19].

Otro caso fue el del proyecto vial “Construcción Conectante C1-C2 Unidad Funcional 1 Bucaramanga – Pamplona”, a través del Auto 2789 del 5 de julio de 2017 se inició el trámite administrativo de licenciamiento ambiental y mediante el cual se han reconocido más de 1000 personas como terceros intervinientes dentro del trámite administrativo en mención [20].

Mediante entrevista¹ con un funcionario de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se logró obtener una estadística de las audiencias públicas realizadas desde el año 2011 hasta la actualidad (octubre de 2018) en los diferentes sectores como se evidencia en la tabla 1.

Cabe mencionar que estas audiencias públicas han sido realizadas tanto en etapa de evaluación como seguimiento ambiental, conforme se explicó anteriormente. No obstante, se hace la claridad que las audiencias públicas en el sector de infraestructura todas han sido dentro del trámite de licenciamiento ambiental

Tabla 1. Clasificación de las Audiencias Públicas Ambientales desde el año 2011 hasta el 2018 clasificadas por sector.

Audiencias Públicas Ambientales						
Año	Clasificación por Sector					Total Realizadas
	Hidrocarburos	Minería	Energía	Infraestructura	Agroquímicos	
2011	0	1	0	0	0	1
2012	2	0	0	0	0	2
2013	9	0	3	0	0	12
2014	5	0	1	2	0	8
2015	6	2	1	2	0	11
2016	2	3	1	2	0	8
2017	3	2	1	2	0	8
2018	1	0	3	2	0	6
	28	8	10	10	0	56

Fuente: Funcionario de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 2018.

¹ (Funcionario de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales [Entrevista]. 16 de octubre de 2018)

Igualmente, mediante entrevista² con un funcionario de la Oficina Asesora de Planeación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se logró obtener una estadística de los trámites administrativos de licenciamiento ambiental desde el año 2011 hasta la actualidad (septiembre de 2018) en el sector de infraestructura como se evidencia en la tabla 2.

Tabla 2. Trámites de licenciamiento ambiental en el sector de Infraestructura desde el año 2011 hasta la actualidad (30 de septiembre de 2018)

Trámites de licenciamiento ambiental			
Año	Sector de Infraestructura		
	Solicitud de Licencia	Solicitud de Modificación	Total de trámites
2011	1	0	1
2012	5	11	16
2013	16	7	23
2014	20	12	32
2015	26	10	36
2016	16	12	28
2017	29	4	33
2018	4	2	6
	117	58	175

Fuente: Elaboración propia con información suministrada en la entrevista, 2018.

Finalmente, en cuanto a los terceros intervinientes, los funcionarios³ de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales manifestaron que no se cuenta con una base estadística, toda vez que la participación ciudadana es muy alta en todos los sectores, ya que se puede hablar de que en un año en todos los trámites administrativos efectuados se pueden reconocer más de 1000 personas como terceros intervinientes, en sectores como hidrocarburos, infraestructura y minería, principalmente.

² (Funcionario de la Oficina Asesora de Planeación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales [Entrevista]. 16 de octubre de 2018)

³ (Funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales [Entrevistas]. 16 de octubre de 2018)

En ese sentido, la tabla 1. Sobre las audiencias públicas, y la información suministrada frente a los terceros intervinientes nos muestran el comportamiento que ha tenido la participación ciudadana en el sector de infraestructura desde el año 2011 hasta la actualidad (octubre de 2018). Así las cosas, se logró tener información para conocer el estado actual de la participación ciudadana de comunidades no étnicas en los trámites de licenciamiento ambiental en el sector de infraestructura.

3. CONCLUSIONES

La participación ciudadana de comunidades no étnicas en el trámite de licenciamiento ambiental en proyectos de infraestructura fue explicada desde el principio de democracia participativa a la luz de la Corte Constitucional, se explicó los mecanismos de participación y las etapas del trámite de licenciamiento ambiental. Los resultados de la revisión bibliográfica y de las entrevistas realizadas mostraron que la ciudadanía, esto es, las comunidades no étnicas no hacen uso efectivo de estos mecanismos de participación, es decir de las audiencias públicas ambientales y del derecho a intervenir en trámites ambientales.

Pues se observa de la comparación entre la tabla 1 y la tabla 2 que de 175 trámites ambientales, bien sea de solicitud de licencia ambiental o de modificación, tan solo se efectuaron 10 audiencias públicas; es decir ni el 10% de la totalidad de los trámites administrativos realizados entre el año 2011 y octubre de 2018.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] *Corte Constitucional. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencia T-637, 2001.*
- [2] *Corte Constitucional. M.P. Hernando Herrera Vergara. Sentencia C-180, 1994.*
- [3] *Corte Constitucional. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Sentencia T-263, 2010.*
- [4] *Corte Constitucional. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Sentencia T-123, 2009.*

- [5] Asamblea Nacional Constituyente, *Constitución Política de Colombia*, 1991.
- [6] Corte Constitucional. M.P. Jaime Araujo Renteria. *Sentencia C-891*, 2002.
- [7] Corte Constitucional. M.P. Hernando Herrera Vergara. *Sentencia C-585*, 1995.
- [8] Congreso de Colombia, *Ley 99 de 1993*.
- [9] Presidente de la República de Colombia, *Decreto 1076 de 2015 Por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente*.
- [10] Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, «Anla,» 2015. [En línea]. Available: http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/SIPTA/tr_2015_carreteras.pdf. [Último acceso: 19 Agosto 2018].
- [11] N. A. G. Q. D. C. T. y. V. G. H. Carlos Zárate Yepes, «Análisis de los tiempos para el otorgamiento de la licencia ambiental en Colombia,» *Estudios de Derecho*, vol. 73, nº 161, pp. 205-225, 2016.
- [12] A. G. Rey y C. A. R. y. G. A. Rodríguez, «Los regímenes de transición del licenciamiento ambiental en Colombia vistos desde la actividad minera,» *Revista Prolegómenos Derechos y Valores*, vol. 19, nº 38, pp. 161-181, 2016.
- [13] Corte Constitucional. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. *Sentencia C-328*, 1995.
- [14] Corte Constitucional. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. *Sentencia C-746*, 2012.
- [15] Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, «ANLA,» ANLA, 13 Septiembre 2018. [En línea]. Available: <http://portal.anla.gov.co/licencia-ambiental-subdireccion-evaluacion-y-seguimiento>. [Último acceso: 13 Septiembre 2018].
- [16] Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, «ANLA,» 13 Septiembre 2018. [En línea]. Available: http://www.anla.gov.co/ABC-del-Licenciamiento-Ambiental#top_page. [Último acceso: 13 Septiembre 2018].
- [17] L. F. Macias, «ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PARTICIPACIÓN

-] CIUDADANA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA,» *MEDIO AMBIENTE & DERECHO*, revista electrónica de derecho ambiental.
- [18 C. H. O. R., «Conflictos socio-ambientales en el Oriente Antioqueño,»
] *Revista Kavilando*, vol. 7, nº 1, pp. 15-21, 2015.
- [19 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, *Resolución 510 del 13 de mayo de 2016 POR LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES*.
- [20 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, *Auto 1411 del 6 de abril de 2018 Por el cual se reconoce un tercero interviniente*.